



REFERENCIA: 8758-4189-003-2023-00407-00
PROCESO: EJECUTIVO
DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA W&A
DEMANDADO: VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ POLO
ROSA POLO DE RODRIGUEZ

Señor Juez, paso a su despacho el presente proceso ejecutivo, informándole que el apoderado judicial de la parte demandante Dr. ARGELIO ANTONIO MARTINEZ POLO, solicita medida cautelar. Sírvese proveer. Soledad, 02 de mayo de 2024

MIGUEL ANGEL CERVANTES MIRANDA
Secretario

JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS DE COMPETENCIAS MULTIPLES DESOLEDAD – DOS (02) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

Visto y constatado el informe secretarial que antecede y revisado el escrito aportado, se tiene que, el apoderado judicial de la entidad demandante Dr. **ARGELIO ANTONIO MARTINEZ POLO**, solicita medida cautelar, embargo del 50% de la pensión, y demás emolumentos embargables que devengue el demandado VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ POLO, aunado a lo anterior, denota el despacho que no fue aportada por la parte demandante certificado alguno que demuestre la calidad de asociado del ejecutado VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ POLO, por lo anterior se imposibilita otorgar los beneficios consagrados en la ley a las Cooperativas, calidad con la que actúa la demandante.

Con relación a la solicitud de medidas cautelares, se observa que la parte ejecutante no aporta la certificación que indique que el demandado tiene la condición de asociado de la Cooperativa para decretar el porcentaje solicitado, por consiguiente, será negada conforme a lo estipulado en el art. 590 del CGP, en virtud de las siguientes razones:

Sea lo primero en señalar que, la Ley 79 del 1998 en su artículo 27 (párrafo) indica qué personas adquieren la calidad de socios de cooperativas: *“Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los estatutos o reglamentos”*.

La Corte Suprema de Justicia mediante sentencia STL-751 de 2020, magistrado ponente Gerardo Botero Zuluaga, precisa “ *efectuando un análisis teleológico de lo establecido en el artículo 7° de la ley 79 de 1988, que define los actos cooperativos, como aquellos que se realizan entre los asociados y sus cooperativas, o entre éstas entre sí, en desarrollo del objeto social, en concordancia con lo estipulado, en los artículos 142, 143, 144 y 145 del mismo compendio normativo, de los cuales se desprende que “las deducciones establecidas a favor de las cooperativas sólo operan en relación con deudas de sus propios*



asociados, con ocasión de actos cooperativos, se puede colegir, que sólo cuando las cooperativas realizan actos cooperativos, es decir, actos con sus asociados (no con terceros) en desarrollo de su objeto social, son beneficiarias de las prerrogativas legales a que se refieren las normas citadas”

Por su parte la Sala Civil de la misma Corporación, mediante sentencia CSJ STC3786-2019, rememoró lo señalado en la CSJ STC6105-2016, puntualizando: (...) *la obligación ejecutada no nació precisamente a favor de la Cooperativa que promovió la controversia, sino que por el contrario, tuvo su génesis en un negocio de mutuo celebrado entre la aquí accionante y otra con el señor Fredy Páez, siendo cosa distinta que éste posteriormente haya endosado en propiedad el título valor, luego entonces, el crédito exigido judicialmente no tiene naturaleza de un acto cooperativo, requisito sine qua non para la precedencia de la cautela en los términos en que fue solicitada, esto es, sobre el 50% de la mesada pensional de la accionante” Y agrego, que: (...) por el solo hecho que una cooperativa promueva procesos ejecutivos, no conlleva a que resulte procedente el decreto de medidas cautelares como la citada, si en cuenta se tiene que por el hecho del endoso del título valor cambia el tenedor y legítimo acreedor de la acreencia, pero no así la naturaleza de la obligación contenida en éste, pues aceptar una tesis en contrario, sería abrir las puertas para que dichas agremiaciones tuvieran la posibilidad, en un hipotético caso, de realizar compras de cartera a terceros por fuera de sus atribuciones legales, y hacer un uso indiscriminado de la prerrogativa que les concedió la norma antes citada”*

En este sentido, se estima que la excepción de inembargabilidad de las pensiones, como la de los salarios o prestaciones sociales, debe atenderse en interpretación armónica con las disposiciones del Código del Trabajo citadas y otras, como la del artículo 7° de la ley 79 de 1988, conforme se deduce de los citados precedentes en los que se establece que las prerrogativas de las asociaciones solo cobijan los actos cooperativos con sus asociados, y no con otros.

El artículo 6° de la Ley 79 de 1988 reza:

“Artículo 6. A ninguna cooperativa le será permitido:

1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.
2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas.
3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores, o preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales.
4. Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos, y



5. Transformarse en sociedad comercial”. –

El artículo 7° de Ley 79 de 1988 reza: Artículo 7. *Serán actos cooperativos los realizados entre sí por las cooperativas, o entre éstas y sus propios asociados, en desarrollo de su objeto social.*

Que, en el caso bajo estudio, al revisar el Certificado de la Cámara de Comercio de la Cooperativa demandante que el objeto social de la misma indica: “*OBJETO SOCIAL, La entidad tiene por objeto: El objeto del acuerdo cooperativo será el mejoramiento social, económico, y cultural de sus asociados, mediante la prestación de servicios de aportes, crédito, consumo, producción de bienes, comercialización, educación, recreación, cultura, medio ambiente, vivienda y los complementarios de previsión, asistencia y solidaridad...*”

Por su parte, la Superintendencia de la Economía Solidaria mediante Circular Externa No. 0007 de 2001, trata el tema concerniente a los beneficios que permite la ley respecto a los actos cooperativos que realicen las cooperativas con sus asociados y señala lo siguiente:

“... En este orden de ideas, solo cuando las cooperativas realizan actos cooperativos, es decir, actos con sus asociados (no con terceros) en desarrollo de su objeto social, son beneficiarias de las prerrogativas legales a que se refieren las normas citadas pues solo en tales supuestos de hecho se justifican las consecuencias jurídicas favorables que el legislador ha previsto para las mismas”.

Del párrafo anterior, se colige que se debe acreditar la calidad de socio de las cooperativas, para efectos de dar aplicación a lo señalado artículos 156 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, para que la cooperativa goce del beneficio del decreto de embargo del 50% de salarios, pensión y prestaciones sociales. Para el Juzgado, lo anterior no supone que las cooperativas no puedan otorgar créditos y realizar actividades comerciales con particulares, que en efecto ostentan la calidad de terceros no afiliados frente al objeto social principal desarrollado por las cooperativas, por el contrario, tienen plena validez en el Ordenamiento Jurídico, sólo que en este evento constituirán actos de Comercio y no actos Cooperativos, por lo que resultaría contrario a derecho a ese tipo de actos (los de comercio) conceder privilegios y beneficios consagrados a favor de créditos cooperativos. (Artículo 10 de la Ley 79 de 1988).

Como argumento de apoyo a la anterior conclusión, se invoca el precedente de tutela número T- 406 del 2006, relativo al proceso promovido contra el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena y decidido por el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala de Decisión Civil Familia de Cartagena, Magistrado Ponente: Doctor Jorge Tirado Hernández;



Descendiendo al caso concreto y una vez revisado el expediente, observa esta Judicatura, que no se aportó documento alguno que permite inferir que la parte demandada **VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ POLO**, identificado con la C.C. No. 7.471.606, tengan el carácter o calidad de cooperados o socios de la cooperativa ahora demandante, es decir, en el expediente no existe a modo de ejemplo, acta de registro que acredite la condición de asociado del demandado.

De modo que, ante la prueba echada de menos por la demandante, no podrá este Juzgado acceder al decreto de la medida cautelar previa, pues se reitera, no se encuentra demostrada la calidad de socio del ejecutado **VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ POLO**, identificado con la C.C. No. 7.471.606, en este asunto y en esas condiciones, se imposibilita otorgar los beneficios consagrados en la ley a las Cooperativas, calidad con la que actúa la demandante.

En consecuencia, el juzgado,

RESUELVE

PRIMERO: Abstenerse de decretar las medidas cautelares solicitadas al no aportar la prueba de la cual se pueda inferir que los demandados tengan el carácter o calidad de cooperados o socios de la cooperativa ahora demandante, es decir, en el expediente no existe a modo de ejemplo, acta de registro que acredite la condición de asociado de los demandados. Según lo indicado en la parte considerativa de este proveído

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MARIA AUXILIADORA LEON VEGA

JUEZ

Firmado Por:
Maria Auxiliadora Leon Vega
Juez
Juzgado Pequeñas Causas
Juzgado 003 Pequeñas Causas Y Competencia Múltiple
Soledad - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1424a058ae9afb33224d9af2ba84efb62bd52a49667552e19c7cb9d2dcecdc2a**

Documento generado en 02/05/2024 07:02:16 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>